

La política chilena: el descrédito de la clase política, los nuevos movimientos sociales y la ausencia de alternativas políticas nacionales

Mario Garcés D.
Historiador
Director de ECO, Educación y Comunicaciones

La política chilena vive hoy tiempos de incertidumbre, en medio del descrédito de sus élites empresariales y políticas, que interrogan no solo el futuro de muchos dirigentes políticos nacionales sino que también el papel de los partidos políticos y de la propia institucionalidad política estatal heredada de la dictadura. Como contrapartida, entre la mayoría de los chilenos predomina la distancia y el escepticismo con las actuales prácticas políticas. Sin embargo, se abren también paso nuevas iniciativas de organizaciones y movimientos sociales de base que recrean los sentidos y los contenidos de la acción colectiva, haciendo emerger nuevos horizontes para la política. Horizontes, que se recrean en medio de iniciativas de movilización social, memorias y aprendizajes colectivos y, que por cierto, toman su tiempo en madurar y alcanzar visibilidad nacional.

1.- Escándalos y corrupción transversal en la política chilena.

A fines de 2014 estalló el “caso PENTA”, un Banco que financiaba las campañas electorales de la derecha pinochetista –con senadores y diputados identificados y en ejercicio- con fraude al fisco, lavado de dinero, coimas, cohecho, etc., y que llevó a prisión preventiva a los principales operadores y dueños del grupo financiero referido, incluido al ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera. Por otra parte, se destapó en enero de 2015, el caso Dávalos, que comprometía al hijo y la nuera de la presidenta Bachelet en negocios espurios, donde se evidencia tráfico de influencias y negocios millonarios. El capital político de Bachelet, a pesar de las operaciones mediáticas del ejecutivo, cayó estrepitosamente. Pero esta historia recién empezaba, ya que se comenzaron a ventilar nuevas investigaciones en la Fiscalía Nacional, que vinculaban los negocios y la política, no solo de la derecha, sino que también de la alianza en el gobierno, autodenominada Nueva Mayoría. Pronto se hizo evidente, en medio de trabas a la justicia, el papel de una empresa minera (SOQUIMICH), cedida por Pinochet a su ex yerno, que habría financiado campañas desde la derecha a la izquierda¹. A lo largo de 2015 se sucedieron las denuncias que implicaron al senador Orpis, de la UDI, partido político de la derecha pinochetista, que recibía millonarios pagos de las empresas

¹ Me refiero a la izquierda instalada en el Estado, distinta a otros grupos y corrientes de izquierda, que se recrean al margen de las instituciones formales del Estado

pesqueras; al senador Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, que recibía recursos a través de sus hijos; más tarde fueron implicados el ex senador y ex ministro Longueira (UDI) que coludido con SOQUIMICH redactó la ley de royalty minero; el ex candidato Presidencial Marco Enríquez (del denominado Progresismo), por dineros para su campaña y el uso de un avión brasileño; recientemente se ha acusado al ex presidente Frei, que también recibió recursos para su última campaña a través de uno de sus hermanos.

La lista de acusados e implicados no es exhaustiva, es solo una muestra de algunos casos emblemáticos que muestran no solo la relación entre negocios y política, sino más ampliamente cómo *el mercado -el gran empresariado en connivencia con el capital trasnacional- ha colonizado el Estado*. En efecto, la corrupción y el escándalo, como se dice hoy en Chile, tiene variadas “aristas”: 1) las empresas implicadas, que se supone, son muchas más que las que han aparecido públicamente; 2) el financiamiento de las campañas políticas se hacía de modo ilícito y espurio; 3) se evidencia la dependencia, sino el pago de servicios de algunas empresas a parlamentarios para que legislaran en su favor; 4) la corrupción adquiere un carácter transversal (de izquierda a derecha); 5) hay diversas dimensiones éticas implicadas (no solo se ha defraudado al fisco, sino que la empresa más implicada es propiedad de un ex yerno de Pinochet).

2.- El ocaso de Bachelet

Ciertamente el caso del escándalo que envolvió al hijo de la presidenta y la actual indagación judicial que implica a Natalia Compagnon, nuera de la presidenta, puso a Bachelet en una incómoda situación. Sus declaraciones públicas tardías, en las que indicó que “se enteró por la prensa” de lo sucedido, fueron poco creíbles para la mayoría de la población, pero además, la escasa colaboración con la justicia de sus más cercanos colaboradores llevó a una crisis de gabinete que le costó la salida del Ministro del Interior y el breve paso por el Ministerio de Hacienda de otro personaje implicado en negocios con empresas mineras.

Las explicaciones piadosas, en su condición de madre de Dávalos, no fueron suficientes para “blindar a Bachelet”, ya que el problema que se constituía era más de fondo. ¿Podía Bachelet ocupar un rol más activo en la lucha en contra de la corrupción o estaba fuertemente limitada por los modos en que estaba implicada su propia coalición? ¿Se podrían ventilar públicamente el origen de los fondos de su propia campaña presidencial? La verdad es que todo indica que la colusión entre negocios y política es muy profunda y que nadie o muy pocos están libres de culpas.

3.- La crisis de legitimidad de la política.

Los problemas de “legitimidad” de la política chilena son ya muy antiguos: 17 años de dictadura y 25 años de recuperación de una democracia regida por una Constitución Política del Estado, heredada de la dictadura. Una democracia a medias, semi-soberana, como la calificó un destacado cientista político, o “protegida” como la deseaba Pinochet y la derecha golpista, siguiendo a su

ideólogo Jaime Guzmán. En efecto, la transición a la democracia se realizó mediante un pacto que otorgó gran protagonismo a los partidos políticos y que subordinó a los movimientos sociales, los que al decir de Edgardo Boenniger, uno de los cerebros de la transición, debían desarrollarse “a la sombra de los partidos”. (Lecciones de gobernabilidad, 1997). No ocurrió lo mismo con los militares, los empresarios y la Iglesia -los denominados poderes fácticos- que ocuparían diversos y activos roles en la democracia reconquistada. En el mediano plazo, el pacto de la transición, transformó la política en un asunto mediático y relativo al funcionamiento regular de las instituciones del Estado (y, más en particular, de políticas públicas definidas sin la participación popular) el protagonismo de algunas figuras públicas y el “ejercicio electoral “ de la democracia (como indicó el Informe sobre Democracia del PNUD en 2004), una democracia electoral más que una democracia de ciudadanos). La contraparte de la “democracia electoral” fue el “crecimiento económico”, favorecido por la inversión extranjera –sobre todo en la minería- y la expansión del mercado de bienes de consumo a través de Tratados de Libre Comercio, la multiplicación de los retail (malls, supermercados, cadenas monopólicas de farmacias en el negocio de los medicamentos, etc.) y la masificación de las tarjetas de crédito. Todo devino en mercado de bienes, desde la compra de alimentos hasta el ingreso a la universidad de las nuevas generaciones y el acceso a la salud de mediana calidad. Toda la vida social alcanzó entonces un punto culminante en la posesión de “dinero”, que elevó el estatus de los grandes ricos, de la emergente clase media hasta la del narcotraficante de los barrios populares.

La política transformada en un asunto mediático y de profesionales dedicados a ella (en Chile se autodenominan, personas dedicadas al “servicio público”) se fue alejando cada vez más de los ciudadanos, que paulatinamente dejaron de interesarse en los asuntos públicos. El indicador más preocupante fue el de los jóvenes que no votaban (no se inscribían en los registros electorales) y cuando se aprobó la ley de inscripción automática y voto voluntario, la mayoría de las personas no se interesó en votar y otros tantos que antes votaban por obligación, dejaron de hacerlo. Bachelet fue elegida en 2014 con un 58% de abstención y en los días que corren ad portas de una elección municipal, todos temen una gran abstención. Los políticos, incluida la presidenta, creen que esto se debe a una falta “de educación cívica”, dicho de otro modo, el pueblo no vota por falta de cultura cívica. Notable percepción, cuando en realidad el pueblo no vota por otras razones, entre otras por el desprestigio de los políticos profesionales y por la distancia que se percibe de la política estatal y de los partidos con relación a la vida cotidiana de la gente, amén de los escándalos por corrupción, que solo confirman las negativas percepciones de la actividad política en la actualidad.

Por otra parte, el gobierno ha convocado a un “proceso constituyente” que abriría espacios para que se pronuncien los ciudadanos sobre la elaboración de una nueva Constitución Política de Estado, tarea prometida en el programa de gobierno de Bachelet. Sin embargo, junto a la tardanza con que se ha iniciado esta promesa de campaña, no se asegura una participación ampliada de la ciudadanía y se escabulle la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. E incluso más se deja abierta la posibilidad que sea simplemente el desacreditado parlamento el que reforme o apruebe una nueva Constitución Política.

Más grave aún es la relación con la política norteamericana, en particular con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), -el mayor tratado de libre comercio del área Asia-Pacífico- ya firmado por Chile, que se definió desde el área económica y de Relaciones Exteriores, con absoluta distancia de los ciudadanos e incluso del propio Parlamento, que seguramente lo ratificará.

4- El movimiento estudiantil

El guion de la transición o de la democracia recuperada, funcionaba relativamente bien para las elites chilenas hasta el año 2011, cuando emergió el mayor movimiento social post dictadura, el movimiento estudiantil. Primero fueron los estudiantes secundarios los que se levantaron el 2006 para hacer visible el malestar y la crítica al sistema educativo nacional; el 2011 en cambio, fueron los universitarios y también los secundarios. Entonces, las calles se animaron y se vistieron de color, de música y de consignas con miles de estudiantes demandando “educación gratuita y de calidad”, o dicho de otro modo, exigiendo que la educación fuera reconocida como un derecho y no un “bien de consumo” como la definió con desparpajo empresarial, el ex presidente Piñera. Se sucedieron al menos seis meses de movilización, que no lograron producir reformas significativas en el Estado porque la derecha, sobre representada en el sistema político, lo impidió. Sin embargo, para las mayorías se hizo visible en esos días, que producir reformas en Chile obligaba a cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura. La crisis de legitimidad de la política chilena se hizo entonces manifiesta para muchos chilenos. La sociedad se puede movilizar masiva y persistentemente, pero si el ejecutivo y el parlamento se niegan a producir los cambios demandados no hay cambios.

Y así como se indica que el pueblo no vota por falta de educación cívica, se les dijo a los estudiantes, “si quieren cambios entren a los partidos u organicen nuevos e ingresen al parlamento”. Para eso están los partidos, para representarlos en el sistema político y por esa vía se pueden producir los cambios de modo democrático. Aparentemente, una sabia aunque ingenua recomendación, cuando en realidad, en el parlamento se congrega una mayoría de representantes de partidos financiados por grandes empresas nacionales, que velan por el denominado “interés nacional”, que habitualmente quiere decir, el interés de las elites políticas y empresariales.

Pero, todavía más, luego del impasse generado entre el movimiento estudiantil y el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, se organizó una nueva alianza política, la “Nueva Mayoría” (heredera de la Concertación, pero ahora con el Partido Comunista adentro) que llevó al segundo mandato de Bachelet, la que tomó las banderas del movimiento estudiantil y lo hizo programa político. Notable progreso que los estudiantes no esperaban, pero un nuevo acto de alquimia política. Las reformas (educativa, tributaria y constitucional) se harían, pero sin los estudiantes. Continuaba en ejerció la vieja receta de la transición, algunos cambios pero sin los movimientos sociales. La “calle” es peligrosa y una eventual amenaza para la gobernabilidad. Y se reprodujo entonces la vieja historia: la derecha obstaculiza las reformas, el gobierno las hace a medias y los movimientos se repliegan. Unos devienen en espectadores de la política; otros en actores secundarios y minoritarios en el sistema político (tres dirigentes estudiantiles forman la denominada “bancada estudiantil” en

el Congreso); y, otros, vuelven sobre sus “colectivos” para repensar y en el mejor de los casos “reformular” sus prácticas políticas.

5.- Los otros movimientos sociales

Con todo, en los últimos años no son solo los estudiantes los que se han movilizado. Existe otra diversidad de iniciativas movimientistas. Probablemente es el pueblo mapuche uno de los más significativos, en sus luchas por la recuperación de sus territorios usurpados y su reconocimiento como “pueblo-nación”. Los mapuches han sufrido los mayores embates de la represión en democracia, con la “militarización” de sus territorios y la aplicación de la Ley anti terrorista, que hace posible el recurso a “testigos encubiertos” y la dictación de penas que doblan las del derecho común (un ataque incendiario tienen una pena de 5 años de cárcel, con la ley antiterrorista, de 10 años).

Pero, también en los últimos años, se han producido movilizaciones territoriales en las regiones (Punta Arenas, Aysén, Freirina, Calama, etc.)², movimientos ambientalistas, movimientos de profesores y de trabajadores, de las minorías sexuales, de grupos de pobladores “sin casa”. Se trata de una diversidad de iniciativas, que producen asociaciones por la base, generan nuevos liderazgos, movilizan a grupos territoriales o sectoriales en torno a demandas específicas (protección del medio ambiente, salarios, derechos laborales, etc.)³. Vistos, desde esta perspectiva, los movimientos sociales en Chile interpelan la política ambiental y las relaciones con la naturaleza (sobre todo a propósito de la explotación transnacional de la minería y el uso y la contaminación de la aguas y del aire), el valor de las culturas y los derechos ancestrales de nuestros pueblos originarios, las formas de educar y la relación de la escuela con las comunidades locales, los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, el valor la vida y los sentidos comunitarios en los barrios y en los pueblos, la memoria y la defensa de los Derechos Humanos.

Es verdad que las expresiones más visibles de los movimientos sociales —y que de tanto en tanto, los medios de comunicación no pueden ignorar- tienden a enfatizar en las tradiciones reivindicativas de los movimientos populares en Chile, es decir, en su capacidad de presión sobre el Estado. Pero,

² En estos mismos días, mientras escribo este artículo, se ha desencadenado un explosivo movimiento regional en la Isla de Chiloé, al sur del país, como producto el daño provocado por la industria salmonera en ecosistema marino, que ha llevado a la paralización de la pesca artesanal y la alteración del conjunto de la economía regional.

³ En una perspectiva más amplia, se trata de lo que el sociólogo italiano Alberto Melucci, denominó “sistemas de acción”, en el sentido de que las estructuras de los movimientos sociales “son construidas por objetivos, creencias, decisiones e intercambios, todos ellos operando en un campo sistémico”. Una acción colectiva, precisaba Melucci, “no puede ser explicada sin tomar en cuenta cómo son movilizados los recursos internos y externos, cómo las estructuras organizativas son erigidas y mantenidas, cómo las funciones de liderazgo son garantizadas. Lo que empíricamente se denomina un “movimiento social” es un sistema de acción que conecta orientaciones y propósitos plurales”. (Alberto Melucci. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México, 1999).

en realidad, lo que está en juego son cambios más profundos en las percepciones que los grupos organizados tienen de su entorno, de las tensiones y contradicciones que comprometen su vida cotidiana y de las relaciones simbólicas y de poder que organizan la actual sociedad chilena desigual y segmentada.

Los cambios que protagonizan los movimientos no encuentran fácilmente traducción en nuevas “alternativas políticas”. En algunos casos, alcanzan visibilidad pública, sobre todo cuando alcanzan masividad y viven los efectos de la represión y la criminalización de la protesta social; en otros, sus demandas son reconocidas por los medios de comunicación y parcialmente acogidas por el Estado, pero puede tomar largo tiempo el que sus nuevas visiones de la sociedad y la política sean compartidas por otros grupos sociales y que vayan modificando en el tiempo, las nociones mismas de lo público y la política. Como hemos indicado desde ECO, “pensar los cambios políticos desde los movimientos sociales supone un largo camino de deliberaciones, escuchas mutuas, aprendizajes y propuestas de cambio; (admitir) que las organizaciones sociales y más ampliamente los movimientos sociales son diversos y actúan en ámbitos y territorios diferentes. Se articulan sobre sus propios análisis, sus propias memorias y temporalidades así como sus propias dinámicas de deliberación y propuestas de cambio. Todo ello constituye el que hacer de un proceso de construcción colectivo en que emerge un nuevo rostro de lo político desde el abajo cotidiano de vecindades y territorios. Es un proceso de construcción de un nuevo modo de hacer política” (Cal y Canto, segunda época, Nov. 2015)

6.- ¿El desarrollo de nuevas alternativas políticas?

Asistimos en Chile, desde hace ya varios años, al desfase o el distanciamiento que instaló la transición a la democracia entre la política y la sociedad, que tomó forma en el elitismo de la política así como en la prolongación en el tiempo de núcleos fundamentales de la institucionalidad y la “legalidad” heredada de la dictadura. Este desfase conlleva una suerte de monopolización de la política por parte de los partidos políticos y el Estado y la despolitización del conjunto de la sociedad. En la vida social despolitizada predomina el mercado con sus diversos modos de acceso a los bienes de consumo, y una débil presencia del Estado en los servicios públicos, la mayor parte de ellos privatizados o externalizados. En este contexto, de la realización del sueño neoliberal, es decir, de una democracia representativa pero sin participación popular, se han producido reformas parciales de la Constitución así como políticas públicas orientadas hacia los más pobres, pero, en términos generales, éstas las definen, según sea el caso, los políticos profesionales o los nuevos tecnócratas en el gobierno. En rigor entonces, el cambio social con un genuino sentido democrático, solo proviene de la resistencia, la movilización y las propuestas de los movimientos sociales, que se articulan en el campo territorial o sectorial. La dinámica de los movimientos sociales es hoy en día la principal forma de politización o re-politización de la sociedad. Los movimientos sociales hacen política por otros medios, distintos a los consagrados por las instituciones y la política tradicional. Estas nuevas formas de la política, que emergen con los movimientos sociales, se mueven a sus propios ritmos y muchas veces en una temporalidad distinta a la de la política tradicional. Este

desfase o distanciamiento entre lo social y lo político, a diferencia de otras épocas históricas, dificulta o pone ritmos y tiempos más largos de maduración para el surgimiento y desarrollo de alternativas políticas democráticas y populares en el nivel nacional.

En el Chile de hoy, a semejanza de otros países, la política tradicional se desenvuelve en medio de una profunda crisis, en el sentido de su desprestigio, el rechazo y el malestar que provoca en la sociedad. Todas las encuestas muestran la baja credibilidad de los ciudadanos y la débil popularidad de los partidos y los políticos profesionales. Los escándalos asociados a la corrupción no han hecho más que confirmar los peores presagios sobre la política nacional. En el reciente período estival en que proliferan festivales en el nivel nacional y regional, los humoristas “hicieron su agosto” con los políticos chilenos, de derecha y de izquierda si es que aún vale la distinción. El malestar ciudadano encontró una “forma de representación” en el humor. Pero, claro, el humor no alcanza para constituir alternativas políticas, es solo una expresión socio cultural del malestar. Tampoco en Chile se ha constituido algo semejante a los indignados españoles y a PODEMOS. La crisis de la política se desenvuelve en medio de la ausencia de alternativas nacionales, lo que nos hace pensar que, por ahora, la resolución de la crisis de legitimidad asociada a la corrupción tenderá a resolverse de modo endógeno, es decir, con medidas cosméticas resueltas entre los propios políticos profesionales.

En los medios políticos tradicionales y también en el ámbito académico, cada tanto circulan temores que la crisis de la política podría pavimentar el camino para alternativas populistas, en el sentido de la emergencia de algún liderazgo carismático, probablemente de derecha. Es una alternativa, aunque en Chile los liderazgos populistas supusieron procesos políticos de mayor desarrollo y los fenómenos populistas de tipo coyuntural no prosperaron. Pareciera más probable una cierta continuidad de la situación actual con algún grado de mayor fragmentación de la actual clase política, con mayor presencia de partidos regionales, en medio de una extendida apatía ciudadana. También puede ocurrir, que sucesos no previstos, provoquen manifestaciones masivas de malestar y de la rabia ciudadana acumulada, pero a la manera chilena, como irrupción, como reventón, como motín urbano.

La sociedad chilena fue protagonista y testigo en el pasado reciente de proyectos políticos nacionales que interpelaron al conjunto de la sociedad en favor del cambio social, la democracia y el socialismo (la “revolución en libertad en los 60; la Unidad Popular en los 70; la resistencia a la dictadura en los 80), proyectos que tenían en común una fuerte presencia de los sectores populares organizados y un papel muy protagónico de los partidos políticos, tanto del centro como de la izquierda. Los límites (y derrotas) de esos proyectos, se tienden a explicar por la mayor fuerza simbólica y material de sus oponentes (los Estados Unidos; la vieja oligarquía y los nuevos empresarios; la clase media subordinada y por cierto, los militares), pero, en realidad, hay que admitir que esas derrotas fueron también responsabilidad del sistema de partidos políticos chilenos, que no lograron acoger, escuchar y dialogar con los movimientos sociales y organizaciones sociales de base. Como ese proceso de revisión y autocrítica histórica no ha tenido lugar o solo a medias, en la transición a la democracia, los partidos volvieron a tomar o han querido retomar sus viejos roles dirigentes, pero ahora –parafraseando una vieja sentencia de Marx- más cerca de la “comedia” que de una genuina propuesta democrática. En este sentido, el mayor desafío político de hoy pareciera

ser el desarrollo de una nueva cultura política que se funda y emerja de la sociedad civil (el verdadero hogar de la historia), es decir, de las prácticas, valores, iniciativas, aspiraciones y deseos de un “mejor vivir” de los movimientos y organizaciones sociales y culturales de base.